

LA CERTIFICACION DEL SR. REAGAN Y LA PRENSA DE EEUU

De acuerdo a las Secciones 728 (b), (d) y (e) del Acta de Seguridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo (PL 97-113), firmada por el Congreso de Estados Unidos en 1981, el Presidente de este país debe certificar que el gobierno de El Salvador está haciendo "esfuerzos concertados y significativos" en 5 áreas específicas para seguir siendo acreedor a la sustancial ayuda militar de Washington. Estas áreas son: 1) cumplir con el respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos; 2) lograr un control sustancial sobre todos los elementos de sus propias fuerzas armadas para poner fin a la tortura y asesinato indiscriminado de ciudadanos salvadoreños; 3) progresar continuamente en la implementación de reformas económicas y políticas; 4) demostrar buena fe en sus esfuerzos por iniciar discusiones con todas las facciones mayoritarias en El Salvador que hayan declarado su voluntad de implementar una solución política al conflicto, y 5) realizar esfuerzos por investigar el asesinato de por lo menos 6 ciudadanos estadounidenses y llevar a juicio a los responsables.

La certificación que diera el Secretario de Estado Shultz al Congreso el pasado 21 de enero, por mandato del Presidente Reagan, es la tercera certificación que la Administración extiende. El proceso de certificación, así como el contenido mismo de lo que se certifica, ha generado un intenso debate público al interior de los Estados Unidos. Así parecen evidenciarlo las numerosas misiones oficiales y no oficiales que se hicieron presentes en el país en las semanas previas a la certificación (16, según voceros de la Embajada de Estados Unidos), la cantidad de pulgadas cuadradas dedicadas a noticias y editoriales sobre El Salvador y la certificación aparecidas en los principales rotativos norteamericanos, y las

acciones de hecho que se han suscitado en diferentes ciudades de Estados Unidos una vez que se ha conocido que Reagan ha vuelto a certificar. Pretendemos aquí examinar qué es lo que está en discusión sobre la certificación y sobre El Salvador, tal como se desprende de las páginas editoriales de varios rotativos norteamericanos de importancia. Para ello nos hemos basado en 6 editoriales aparecidos entre el 6 y el 28 de enero de 1983 en el *Wall Street Journal* (WSJ), el *New York Times* (NYT), el *Washington Post* (WP) y el *Miami Herald* (MH).

1. Cuestionamiento a la política de Washington

Tanto el NYT como el WP parecen coincidir en que, detrás de la certificación, independientemente del juicio que se pueda emitir sobre su validez o utilidad, existe una falta de confianza en cuanto a la política de la Administración Reagan hacia El Salvador.

Dice el NYT, en su editorial del 24 de enero: "Este requisito (de la certificación) nunca hubiese sido escrito, ni hubiese sobrevivido, si los norteamericanos tuvieran más confianza, o por lo menos un mayor entendimiento, sobre los propósitos de la Administración en Centroamérica. La política aborrece el vacío. Cuando el Presidente Reagan dejó de explicitar las condiciones para la ayuda militar de Estados Unidos a El Salvador, y parecía insensible ante las brutalidades de ese gobierno, el Congreso se arrogó la tarea de explicitarlas. Si lo han hecho en forma imperfecta, sus condiciones son preferibles a un cheque en blanco".

Por su parte, el columnista Stephen Rosenfeld del WP comenta: "Nuestro argumento sobre la certificación de los derechos humanos

no lleva a ninguna parte a la que quisiéramos ir: es incorrecto el que encubramos al gobierno salvadoreño, como lo es el cortar nuestra ayuda. Pero el problema de nuestra política no es el que estemos apoyando a un gobierno imperfecto. Es el que no estemos agotando los medios diplomáticos a nuestro alcance para servir nuestro principal propósito en El Salvador: el ver que, de una forma u otra, la voluntad popular sea finalmente honrada". En su columna editorial del 24 de enero, Rosenfeld sugiere que "ya es tiempo para una nueva política de Estados Unidos", y que "se le debe mostrar a Reagan una vía alternativa que sirva de definición de los intereses norteamericanos y que él considere aceptable". Y prosigue: "Estados Unidos no tiene por qué estar dictando lo que debe hacerse en esa región. Esa es la gran falla de nuestra política actual". Para Rosenfeld, apoyar al gobierno con su alternativa electoral como mecanismo para la distribución del poder en El Salvador, es tan objetable como el asignar cuotas de poder a aquellos grupos que no se la hayan ganado a través de elecciones. En ambas situaciones, los Estados Unidos se ponen en situaciones de injerencia. "Un curso más sensato", dice, "sería el que los Estados Unidos delimitaran la arena política mientras los salvadoreños se arreglan entre ellos como puedan".

2. La certificación presidencial es una farsa

Tanto el NYT como el WP y el MH, con sus variantes y matices, consideran que la evidencia presentada no es suficiente como para justificar la certificación del presidente, y que el hacerlo constituye, desde un acto "de mala fe" hasta un acto de "hipocresía".

El MH analiza una serie de elementos sobre la realidad salvadoreña y se pregunta si ellos pueden entenderse como "progreso". Se pregunta: "¿Es la reciente rebelión de un comandante regional, el Tte. Cnel. Sigifrido Ochoa, 'progreso', por ejemplo? El episodio muestra que incluso los militares salvadoreños se encuentran divididos entre derechistas centristas y rivales. ¿Es ésto 'progreso'? (...) ¿Ha habido progreso real desde el pasado octubre, cuando el Sr. Hinton amenazó con cortar la ayuda a menos que verdaderos progresos, en contraposición a meros arreglos cosméticos, se hicieran pronto? ¿Se ha hecho algún progreso desde el 1o. de noviembre, cuando declaró que el sistema de justicia del país estaba 'podrido'? ¿Ha habido algún progreso en

el frente de batalla, después de la mayor ofensiva izquierdista en 2 años?"

La columnista Mary McGrory, del WP, dice en una columna del 25 de enero: "No había, por supuesto, alguna posibilidad de que Reagan no certificaría ... Incliné su mano durante su reciente viaje a la región en diciembre pasado, cuando memorablemente exoneró al Gral. Rios Montt, quien se encuentra parado sobre una pila de cadáveres de campesinos, de violaciones a los derechos humanos". Comenta sobre las misiones que visitaron el país antes de la certificación, diciendo que han hablado con personeros militares, dirigentes civiles, sacerdotes, prisioneros, refugiados, campesinos, empresarios. Y concluye: "Todos cuentan sus historias, sabiendo que es una pérdida de energía, por lo menos en lo que concierne a su propio gobierno (el de Estados Unidos)".

El NYT es mucho más severo en su crítica. Dice: "Cuando el Congreso ata una pita a la ayuda de Estados Unidos, puede ponerle un nudo a la diplomacia norteamericana. La travesura de la intromisión legislativa se ha hecho más que evidente en la confusión e hipocresía promovida por la ley que compele al presidente a repetir, como lo hace cada 6 meses, lo que casi ningún norteamericano cree: que El Salvador está 'haciendo progreso' en su respeto a los derechos humanos y en sus reformas políticas". Y concluye: "El Congreso debe decidir si sigue aceptando turbias aseveraciones de que los asesinatos políticos en El Salvador son menos, que la reforma agraria y las negociaciones están avanzando y que los tribunales verdaderamente se están moviendo para castigar a los asesinos de 5 religiosas norteamericanas, 2 asesores de la reforma agraria y un dirigente campesino salvadoreño. De acuerdo a la evidencia que existe, El Salvador no merece la certificación".

3. Mayores condicionamientos a la ayuda

¿Qué proponen los editorialistas como solución a esta situación de políticas equivocadas y certificaciones deshonestas? Todos, con la excepción del WSJ coinciden en que el Congreso debe incrementar su control y sus presiones sobre la Administración, en primer lugar. Dice el NYT: "El negar la certificación esta vez podría sacudir a los dirigentes salvadoreños a que abandonen aquellas políticas que alienan a su pueblo y hacen que la paz sea inalcanzable. Podría incluso sacu-

THE GLOBAL NEWSPAPER
 Edited in Paris
 Printed Simultaneously in
 Paris, London, Tokyo,
 Hong Kong and Singapore
 No. 30,988

Herald INTERNATIONAL Tribune

Published With The New York Times and The Washington Post
 PARIS, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1982

TIME

Subscription Service Form

U.S. Urges Saudis to Help Cairo Build Jets

By George C. Wilson
 WASHINGTON — The State Department is urging Saudi Arabia to help Egypt build 150 fighter jets, a move that would help Cairo meet its military needs and the Gulf oil states, which are seeking to diversify their economies.



Palestinian Roundtable Stirs Allied Concern

By David S. Ortiz
 WASHINGTON — The State Department is expressing concern over a roundtable of Palestinian leaders in Beirut, Lebanon, that is being organized by the PLO.



A Swedish volunteer sticks off an area near the border...

Swedes Continue For Mystery S...

The Detroit News

Detroit Free Press



dir a la Administración (Reagan) para que defina una política hacia Centroamérica, lo cual haría que un pueblo democrático se sintiese orgulloso”.

El MH acoge la idea del Congresista Solarz, en el sentido de otorgarle al Congreso poder para vetar la certificación de la Administración. Dice el MH: “Esto tiene sentido. Pondría presión sobre la Administración para que fuera honesta, y así la alentaría a que presionara por verdaderos progresos ahí (en El Salvador)”. Por su parte, la columnista McGrory del WP, aunque no hace propuestas concretas, ve con buenos ojos el que ciertos sectores se estén distanciando de la política de Reagan, e interpreta esto como presión sobre la Casa Blanca. Dice McGrory: “En todo el predecible escándalo sobre la tercera certificación, hay un nuevo sonido. La AFL-CIO, que ha apoyado las otras dos, está dudando. En vista de la trayectoria de solidaridad durante la Guerra Fría del movimiento sindical con la Administración en lo que a América Latina concierne, éste es un desarrollo sorprendente y esperanzador”. Comenta que William Dougherty, del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, está dispuesto a testificar en el Congreso en contra de la certificación, y concluye: “El (Dougherty) admite que pareciera como si el movimiento sindical estuviese tratando de vengar los asesinatos de su propia gente. Lamenta que mientras miles de salvadoreños han muerto —36,000 en los últimos 4 años— la muerte de 7 estadounidenses constituya el único poder de presión que los norteamericanos que se sienten violentados por la situación, tienen sobre su propio gobierno”.

Pero más allá de incrementar las presiones sobre la Administración, en todos los editoriales se percibe, tanto en términos positivos como en términos negativos, una nueva corriente para que el Congreso presione a la Administración a que busque mecanismos políticos de solución a la guerra civil salvadoreña, y que la Administración, a su vez, condicione la ayuda a iniciativas concretas de diálogo y negociación.

Por el lado negativo, el editor de las páginas editoriales del WSJ, George Melloan, comentaba en una columna editorial el 6 de enero que “La necesidad más urgente entre los gobiernos de América Latina ha sido su legitimidad. Ha habido demasiadas juntas militares corruptas como las de Somoza, algunas de ellas tan corruptas que su ambición por extraer ingresos de la misma empresa privada ha inhibido el desarrollo económico”. Comenta que en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Panamá están tratando de emular la tradición democrática de Costa Rica, y añade: “Es interesante que uno de los obstáculos más fuertes a esta evolución venga de la gran democracia del norte. Hacia finales del año pasado, 17 congresistas demócratas, encabezados por el Rep. Michael Barnes, mostraron su desdén por los esfuerzos que se están haciendo en El Salvador al emitir un comunicado en el que hacían un llamado para un ‘arreglo negociado’ en la lucha que ese país sostiene contra la guerrilla comunista. Para las personas que entienden la situación, esto sería equivalente a incrustar una quinta columna marxista al interior del frágil experimento salvadoreño en la democracia”.

Otros colegas de Melloan no parecen estar de acuerdo. Rosenfeld, del WP se pregunta:

“¿Por qué no probar, en El Salvador, el resolver la guerra civil y servir los intereses de seguridad del gobierno (de Estados Unidos) delineando los términos de un arreglo justo y presionado para que éste se lleve a cabo?” Para Rosenfeld, los términos de este arreglo podrían ser: “1) un cese al fuego para bajar la temperatura; 2) amnistía para todos, sin importar las cosas horribles que hubiesen hecho; 3) igualdad de legitimidad y acceso para todos los grupos políticos y político-militares; 4) acoger a todos los observadores invitados, garantizadores de la paz y mediadores”. Si bien su propuesta no aborda el punto crítico del poder político, dice Rosenfeld, éste se debe precisamente a que no es competencia de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia el decidir sobre este punto. Para él, dos criterios son los que importan más: que se respete el principio básico de la autodeterminación salvadoreña, a la que tanto Carter como Reagan han dedicado sus políticas hacia El Salvador, y que prometa ser una alternativa para terminar con la guerra. Dice Rosenfeld: “La pregunta relevante no es si cualquier propuesta nueva está libre de fallas, sino si tiene ventajas sobre la política que actualmente persigue esta Administración”.

El **MH** va más allá que sus colegas, apoyando nuevamente la idea del Solarz de que cualquier ayuda militar futura a El Salvador se condicione a la voluntad del gobierno salvadoreño para entablar negociaciones con la izquierda sin condiciones previas. “Tal paso”, dice el editorialista, “le daría poder de presión a los dirigentes salvadoreños moderados en su continua lucha por el poder contra la extrema derecha”. Y continúa diciendo: “No debe temérsele a las negociaciones; ambas partes deben ponerse de acuerdo antes de que se produzca cualquier resultado. Las negociaciones son deseables no porque la izquierda armada sea virtuosa o representa a una mayoría. Son deseables porque la izquierda armada existe; porque continúan destruyendo el país, porque sí tienen algunas quejas que son legítimas, y porque las negociaciones son la mejor esperanza para la paz... Si la ayuda de Estados Unidos se condiciona a perseguir esta idea (de negociación), se fortalecerá a los moderados en esta dirección. No hacerlo será ceder ante la extrema derecha”.

CUDI